

# HONDURAS

---

 <b>Pilar de la OEA</b>	 <b>Nombre de Actividad</b>	 <b>Beneficiarios</b>	 <b>Países Donantes</b>
Derechos Humanos	Diagnósticos Participativos de Género: Transferencia Metodológica	Funcionarios/as de Ministerios de la Mujer	Liechtenstein
 <b>Fecha</b>	<b>1/1/2013</b>	<b>a</b>	<b>Terminación</b>
<b>Información Adicional</b>	<a href="http://www.oas.org/es/cim/mainstreaming.asp">http://www.oas.org/es/cim/mainstreaming.asp</a>		

## RESUMEN DEL PROGRAMA

Si bien los gobiernos de la región han reconocido la transversalización de género como una herramienta analítica y de planificación para incorporar este enfoque en las políticas de ministerios de distintos sectores, la implementación de éstas ha chocado con barreras. En general, no hay una fiscalización efectiva y son pocos los avances en materia de inversión y capacitación de especialistas para poner en práctica políticas de género de manera coordinada. Aún predominan las estrategias de incidencia sectorial vinculadas a proyectos o programas específicos.






Consciente del desafío que esta tarea representa para los Mecanismos Nacionales de la Mujer (MNM), la CIM ha elaborado una metodología y programa de capacitación para la realización de “Diagnósticos Participativos de Género” (DPG), que les permita a dichos Mecanismos realizar intervenciones en distintas instituciones públicas con miras a fortalecer la transversalización del enfoque de género en estas instituciones. El DPG permite, en base a la revisión de documentación disponible y la utilización de metodologías cualitativas y participativas, informar sobre procesos organizacionales respecto al grado en que la perspectiva de género se incorpora en todas las políticas, a todos los niveles y en todas las etapas, por los actores normalmente involucrados en la adopción de tales medidas políticas, para finalmente, elaborar un plan de acción. El Plan de Acción se traduce luego en un documento de planificación que defina al detalle la forma cómo se recomienda sea realizada la transversalización del enfoque de género en un período de tiempo determinado.

## OBJETIVOS

A través de este proyecto, la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM) busca poner a disposición de los MNM de los Estados un programa de capacitación sobre DPGs para la transferencia metodológica a estos Mecanismos, que les permita realizar dichas intervenciones en las instituciones públicas con el fin de fortalecer sus capacidades para lograr una efectiva transversalización del enfoque de género y de derechos en sus políticas, estrategias, programas y en su cultura institucional. . En concreto, el programa fortalece las capacidades de profesionales de los MNM para la realizar Diagnósticos Participativos de Género en otros Ministerios/Departamentos sectoriales e instancias del Estado.

## RESULTADOS

Con base en la utilización de la metodología de diagnóstico participativo de género en los [Ministerios de Desarrollo Social](#) de Barbados, El Salvador y Perú, el programa ha adecuado la metodología a las necesidades de los Mecanismos Nacionales para la Mujer. A la fecha, el proceso de transferencia metodológica se ha llevado a cabo con el Ministerio de la Mujer de Paraguay (2015), y con la Secretaría Presidencial de la Mujer (SEPREM) de Guatemala (2017). Con base en estas experiencias se ha elaborado un [“Manual de Transferencia Metodológica a los Mecanismos Nacionales para el Avance de la Mujer: Diagnóstico Participativo de Género,”](#) que se pone a disposición de los Estados como recurso general.

 <b>Pilar de la OEA</b>	 <b>Nombre de Actividad</b>	 <b>Beneficiarios</b>	 <b>Países Donantes</b>
<b>Derechos Humanos</b>	Mecanismo de Seguimiento de la	<i>Funcionarios/as públicas, sociedad civil, mujeres</i>	Canadá, China, México, Suriname, Trinidad y
 <b>Información Adicional</b> <a href="http://www.oas.org/en/mesecvi/">http://www.oas.org/en/mesecvi/</a> o <a href="http://www.BelemdoPara.org">http://www.BelemdoPara.org</a>			

## RESUMEN DEL PROGRAMA

La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer fue adoptada en Belém do Pará, Brasil, en 1994, define a la violencia contra las mujeres como una violación de sus derechos humanos. La Convención de Belém do Pará establece por primera vez el desarrollo de mecanismos de protección y defensa de los derechos de las mujeres, en la lucha para eliminar la violencia contra su integridad física, sexual y psicológica, tanto en el ámbito público como en el privado.






La implementación efectiva de la Convención requiere un proceso de evaluación y apoyo continuo e independiente, para lo cual se creó en 2004 el Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (MESECVI). Es una metodología de evaluación multilateral sistemática y permanente, fundamentada en un foro de intercambio y cooperación técnica entre los Estados Parte de la Convención y un Comité de Expertas/os. El MESECVI analiza los avances en la implementación de la Convención por sus Estados Parte, así como los desafíos persistentes en las respuestas Estatales ante la violencia contra las mujeres y emite informes y recomendaciones concretas con objeto de fortalecer esas respuestas. Funciona por rondas de evaluación y de seguimiento que incluyen: i) Evaluación de informes, aportados por los Estados Parte de la Convención, sobre las medidas adoptadas para hacer frente a la violencia contra las mujeres; y ii) Seguimiento de la ejecución de las recomendaciones formuladas por las Expertas.

## OBJETIVOS

El objetivo del MESECVI es medir y evaluar los esfuerzos de los Estados para garantizar el derecho de las mujeres de vivir libres de violencia y formular recomendaciones y proporcionar asistencia técnica para fortalecer la respuesta Estatal ante todas las manifestaciones de violencia contra las mujeres. En este contexto, busca recopilar información integral sobre la naturaleza y el alcance de la violencia, analizar el grado y la efectividad de la respuesta Estatal e identificar tanto buenas prácticas que han tenido un impacto positivo como desafíos persistentes que requieren un esfuerzo mayor o especializado. Adicionalmente, el MESECVI identifica áreas de especial preocupación para llamar la atención y emitir recomendaciones adaptadas a esas realidades.

## RESULTADOS

La Convención ha sido ratificada por 32 Estados de la región. De estos, 30 Estados han participado en las rondas de evaluación del MESECVI, aportando información al Comité de Expertas sobre la respuesta Estatal ante la violencia contra las mujeres. Con esta información, el MESECVI ha producido 100 informes nacionales, 75 informes sombra de organizaciones de la sociedad civil, tres informes hemisféricos, dos informes de seguimiento a las recomendaciones de las Expertas y un informe temático sobre el embarazo infantil. El Comité de Expertas ha emitido un total de 151 recomendaciones a distintos actores del Estado y otros. En 2013, el Mecanismo publicó el primer Sistema de indicadores de progreso para la medir la implementación de la Convención desde un enfoque de derechos humanos. Los Estados Parte y el Comité de Expertas han adoptado Declaraciones sobre la violencia política, el femicidio, la prevención de la violencia y los derechos sexuales y reproductivos. Se ha elaborado herramientas de sensibilización y capacitación, incluyendo Guías sobre la aplicación de la Convención y el uso del Sistema de Indicadores, y se ha capacitado a más de 500 personas de distintos sectores de la región. Se cuenta también con una “Especialización y Curso Internacional en Políticas Públicas y Justicia de Género.” Se ha desarrollado una amplia gama de herramientas de comunicación, incluyendo una plataforma virtual de visualización de datos, un compendio de buenas prácticas, infografías, comunicados de prensa, campañas para redes sociales y eventos sobre temas específicos con miras a sensibilizar e identificar acciones concretas.

 <b>Pilar de la OEA</b>	 <b>Nombre de Actividad</b>	 <b>Beneficiarios</b>	 <b>Países Donantes</b>
<b>Derechos Humanos</b>	Mujeres, políticas de drogas y encarcelamiento	Funcionarios/as públicas, sociedad civil,, mujeres	Open Society Foundation, Mexico
 <b>Fecha</b>	<b>2/28/2013</b>	<b>a</b>	<b>Terminación</b>
<b>Información Adicional</b>	<a href="http://www.oas.org/es/cim/mujeresydrugas.asp">http://www.oas.org/es/cim/mujeresydrugas.asp</a>		

## RESUMEN DEL PROGRAMA

Las declaraciones de los medios, acompañadas de los escasos datos disponibles, indican que en los últimos años, la participación de las mujeres en el problema internacional de las drogas ha aumentado considerablemente. Sin embargo, aunque esta participación se hace visible en las noticias, ha estado ausente en la investigación y en otras actividades realizadas por la mayor parte de los organismos gubernamentales e intergubernamentales en las Américas. De igual manera, la perspectiva de género ha estado ausente del trabajo de la propia OEA sobre “el problema mundial de las drogas.”

En este contexto, el Comité Directivo de la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM) pidió información específica y recomendaciones concretas sobre el involucramiento de las mujeres en la comercialización de las drogas ilícitas. Este trabajo de recopilación de información produjo resultados alarmantes, en el sentido que se identificó que, si bien las mujeres son una minoría de las personas trabajando en el mundo de las drogas, las mujeres encarceladas por delitos relacionados con las drogas representan entre 60 y 80% del total de la población carcelaria femenina. De allí surgió la necesidad de identificar recomendaciones concretas de reforma legislativa y de políticas públicas, particularmente en relación al tratamiento penal y la actitud social en torno a la participación de las mujeres en estas actividades. Así la CIM inició, en colaboración con la Oficina en Washington sobre Asuntos Latinoamericanos (WOLA) y otros socios, un trabajo de sensibilización y capacitación en esa materia.

## OBJETIVOS






El objetivo del programa es fortalecer la capacidad institucional de las autoridades relevantes (ministerios del interior y de justicia, oficinas nacionales de drogas, mecanismos nacionales de la mujer, parlamentarios/as) y de la sociedad civil para recopilar datos e información sobre la participación de las mujeres en la comercialización de las drogas ilícitas y formular e implementar reformas legislativas y de política pública basadas en salud pública, respetuosas de los derechos humanos y con perspectiva de género en las áreas de: políticas de drogas más incluyentes, reformas a las políticas de drogas, alternativas al encarcelamiento, cultivo o procesamiento de drogas, programas de inclusión social, mujeres embarazadas o con personas dependientes.

## RESULTADOS

La CIM organizó, en el marco de la 43ª Asamblea General de la OEA (junio de 2013, Guatemala) una mesa redonda “Mujeres y drogas en las Américas: Un diagnóstico en construcción,” con objeto de crear conciencia del creciente número de mujeres involucradas en el complejo tema de las drogas. En seguimiento de la mesa redonda, la CIM elaboró el estudio “[Mujeres y drogas en las Américas: Un diagnóstico de políticas en construcción.](#)”

Este estudio inicial resaltó la necesidad de mayor acuerdo político sobre la integración del enfoque de género en el abordaje del tema de las drogas, y dicho tema fue incorporado en la Declaración AG/DEC. 73 (XLIII-O/13) corr. 1 “Declaración de Antigua Guatemala por una política integral frente al problema mundial de las drogas en las Américas.”

En seguimiento de esta Declaración y en colaboración con WOLA y otros socios, la CIM elaboró la “[Mujeres, políticas de drogas y encarcelamiento: Una guía para la reforma de políticas en América Latina y el Caribe](#)” y colaboró en la producción de una serie de ensayos fotográficos sobre la situación de mujeres encarceladas por delitos de drogas en Argentina, Colombia y Costa Rica. Con base en la Guía, se ha capacitado a más de 200 personas en distintos países de la región.

 <b>Pilar de la OEA</b>	 <b>Nombre de Actividad</b>	 <b>Beneficiarios</b>	 <b>Países Donantes</b>
Derechos Humanos	Derechos humanos de las mujeres viviendo con VIH	Funcionarios/as públicas, sociedad civil, mujeres	España, México
 <b>Fecha</b>	9/1/2008 a <b>Terminación</b>		
<b>Información Adicional</b>	<a href="http://www.oas.org/es/cim/vih-derechos.asp">http://www.oas.org/es/cim/vih-derechos.asp</a> o <a href="http://www.vih-violencia.org/">http://www.vih-violencia.org/</a>		

## RESUMEN DEL PROGRAMA

Por razones tanto sociales como biológicas, el VIH se ha ido convirtiendo en una enfermedad de mujeres jóvenes y pobres, muchas de ellas en relaciones monógamas. La información disponible indica que el VIH se está expandiendo de manera alarmante debido al sexo sin protección, siendo El Salvador, Guatemala, Honduras y Panamá, algunos de los países más afectados. Uno de los factores asociados al acelerado proceso de feminización del VIH es la violencia contra las mujeres, que también constituye un problema de proporciones epidémicas en la región.






En seguimiento a la Declaración de San Salvador “Género, violencia y VIH,” adoptada por la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM) en 2007, la CIM inició un programa para examinar y abordar las intersecciones entre el VIH y la violencia contra las mujeres. Entre otros hallazgos, el programa identificó una serie de brechas importantes en la garantía y protección de los derechos de las mujeres viviendo con VIH y/o violencia de género en la región. En respuesta por un lado a las demandas de la comunidad de mujeres viviendo con VIH y por otro lado a la resolución 2802 (2013) de la Asamblea General de la OEA sobre "Promoción y protección de los derechos humanos de las personas vulnerables al VIH/SIDA, viviendo con VIH/SIDA y afectadas por él en las Américas," y con objeto de contribuir a cerrar esas brechas, la CIM ha trabajado para analizar y fortalecer tanto el marco jurídico como las políticas públicas sobre el VIH y la violencia contra las mujeres desde un enfoque de derechos humanos.

## OBJETIVOS

Desde un enfoque de derechos humanos, este programa busca contribuir a los esfuerzos por reducir la prevalencia del VIH/SIDA y de la violencia de género entre las mujeres de la región y sus consecuencias negativas sobre la salud y desarrollo humano de ellas, sus familias y sus comunidades. De igual manera, busca fortalecer el marco jurídico y de políticas públicas en torno a los derechos de las mujeres viviendo con VIH en la región, y mejorar la respuesta estatal ante las múltiples violaciones de estos derechos.

## RESULTADOS

El programa ha producido análisis de situación y mapeos de actores clave en 4 países de Centroamérica (El Salvador, Guatemala, Honduras y Panamá) y 3 países del Caribe anglófono (Antigua y Barbuda, Barbados y Dominica). Se llevó a cabo un “[Análisis comparado del marco jurídico desde el enfoque de derechos humanos: VIH y violencia contra las mujeres en Centroamérica](#)” y se elaboró una guía sobre “[Consideraciones éticas para una respuesta integrada a los derechos humanos, el VIH y la violencia contra las mujeres](#).” Con base en estos avances se elaboraron modelos nacionales de políticas y programas integrados para prevención, atención y tratamientos del VIH y la violencia contra las mujeres en [Guatemala](#) y [Panamá](#). Se ha establecido una Comunidad de Práctica regional sobre VIH y violencia contra las mujeres que sirve como un punto central para el intercambio de información, experiencias exitosas y cooperación técnica. Desde la misma Red, se llevó a cabo una identificación de [Prácticas promisorias por el manejo integrado del VIH y de la violencia contra las mujeres](#) que pueden servir como modelos para adaptación y réplica en otros contextos. En seguimiento de la resolución 2802 de la Asamblea General de la OEA y el acuerdo de colaboración firmado con ONUSIDA, se elaboró el informe “[Derechos humanos de las mujeres que viven con VIH en las Américas](#),” así como una guía de capacitación “[Manual para fortalecer el ejercicio de los derechos humanos de las mujeres que viven con VIH en América Latina](#),” que se ha utilizado en capacitaciones virtuales en la plataforma de la Comunidad de Práctica.

 <b>Pilar de la OEA</b>	 <b>Nombre de Actividad</b>	 <b>Beneficiarios</b>	 <b>Países Donantes</b>
<b>Derechos Humanos</b>	Violencia contra las mujeres en el ámbito	<i>Funcionarios/as públicas, sociedad civil, mujeres</i>	México
 <b>Fecha</b>	<b>2/25/2015</b>	<b>a</b>	<b>Terminación</b>
<b>Información Adicional</b>	<a href="http://www.oas.org/es/cim/violenciapolitica.asp">http://www.oas.org/es/cim/violenciapolitica.asp</a>		

## RESUMEN DEL PROGRAMA

En la región, se ha identificado una preocupación creciente por la violencia contra las mujeres en el ámbito de la política, así como la necesidad de una respuesta contundente y efectiva basada en evidencia. A pesar de que este problema no es nuevo, su entrada en la agenda regional e internacional sí es un fenómeno reciente, por lo que todavía no se han generado instrumentos que puedan servir de apoyo a los países para responder de forma efectiva ante este tipo de violencia. En la medida que las mujeres ocupan un mayor espacio en las distintas esferas del ámbito político - desde las presidencias, los parlamentos, las cortes y las empresas públicas, hasta las alcaldías - han aumentado las múltiples manifestaciones de discriminación y violencia que buscan callar y limitar su protagonismo político y el cambio fundamental que representan para la distribución y el ejercicio del poder. Las Misiones de Observación Electoral que lleva a cabo la OEA también han destacado este problema.

En reconocimiento de esta nueva realidad y la necesidad de adaptar nuestras definiciones, instrumentos jurídicos, protocolos otros mecanismos para responder de manera más efectiva, la CIM ha resaltado la importancia de la legislación para combatir la violencia contra las mujeres y como requisito indispensable para eliminar la impunidad. Dos actores clave para la protección de los derechos políticos de las mujeres en la democracia - los partidos políticos y las instituciones electorales - todavía no han implementado medidas para enfrentar esta problemática.

## OBJETIVOS

El objetivo del programa es fortalecer la capacidad institucional de las autoridades políticas (parlamentos y partidos políticos) y electorales de los Estados Miembros de la OEA fortalecida para mitigar la violencia y el acoso político contra las mujeres en el marco de la Convención de Belém do Pará.

Concretamente, el objetivo se alcanzará a través del desarrollo de herramientas concretas de investigación y adaptación del marco jurídico y de políticas públicas, así como materiales y eventos presenciales y virtuales de diálogo, sensibilización y capacitación.

## RESULTADOS

En 2015, la Conferencia de Estados Parte de la Convención de Belém do Pará adoptó la “Declaración sobre la Violencia y el Acoso Políticos contra las Mujeres.” A raíz de esa Declaración, la CIM ha organizado dos Reuniones de Expertas sobre el tema de la violencia y el acoso político contra las mujeres (25 de febrero de 2015, Washington DC y 30-31 de mayo de 2016, La Paz) con miras a visibilizar el problema de la violencia y el acoso contra las mujeres en el ámbito político e identificar reformas legislativas y políticas, así como acciones concretas para fomentar la prevención, sanción y atención de estos delitos. De estas reuniones y un trabajo de asesoría del Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (MESECVI), ha salido la "Ley Modelo Interamericana sobre Violencia Política contra las Mujeres," un documento que pretende apoyar procesos de reforma y adecuación del marco jurídico nacional para incluir este tema.

En noviembre de 2016, la CIM y el Instituto Nacional Electoral de México (INE) celebraron el Diálogo Regional “El rol de las instituciones electorales frente a la violencia política contra las mujeres,” con miras a examinar las actuaciones de las instituciones administrativas electorales y los desafíos que presenta la atención a la violencia política contra las mujeres en el marco de sus competencias.



Nombre de la Organización que complete el formulario

La Organización de Estados Americanos (OAS/OEA)



Tema

Derechos Humanos e Inclusión  
Social de las Personas con  
Discapacidad



Nombre de Actividad

**Programa de Acción de la Década  
de las Américas por los Derechos  
y la Dignidad de las Personas con  
Discapacidad**



Países Donantes

N/A



Información Adicional

*Enlace a página web*



Fecha

2006

a

2026

## RESUMEN DEL PROGRAMA

El Programa de Acción de la Década de las Américas por los Derechos y la Dignidad de las Personas con Discapacidad (PAD) se elaboró con participación de los Estados Miembros de la OEA y líderes regionales de la sociedad civil de personas con discapacidad y fue aprobado por la Asamblea General de la OEA según la AG/RES 2339 en el año 2007. En el año 2016, la Asamblea General en República Dominicana aprobó su extensión por diez años más, hasta el año 2026. A la fecha se negocia la actualización de este Programa de Acción, conforme a los principios de la Convención de Naciones Unidas por los Derechos de las Personas con Discapacidad y los Objetivos de Desarrollo Sostenible y su Agenda 2030.

El PAD cuenta con 9 objetivos y específicas medidas de acción para el logro de los mismos, las cuales se han convertido en la base de los indicadores de Progreso para el reporte de los Estados que han firmado y ratificado la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad (CIADDIS).

## OBJETIVOS

Promover medidas políticas, legislativas y programáticas destinadas a asegurar la plena inclusión y el respeto de los derechos humanos de las personas con discapacidad en las Américas.

## PAÍS(ES) BENEFICIARIO(S) Y GRUPO(S) DESTINATARIO(S):

A través de este proyecto se benefician los siguientes Estados Miembros de la OEA:

Todos los Estados Miembros de la OEA, independientemente si firmaron o ratificaron la CIADDIS.





## RESULTADOS

A la fecha son 19 los países que han firmado y ratificado la CIADDIS y se han presentado ya dos Informes de cumplimiento basados en este Plan de Acción, los cuales demuestran el progreso logrado desde el año 2006 al 2016 en materia de derechos de las personas con discapacidad, materializados en políticas públicas inclusivas de este colectivo.

La extensión del PAD en un nuevo Decenio de las Américas por los Derechos de las Personas con Discapacidad, solicitado y aprobado tanto por los Estados Miembros de la OEA como por la sociedad civil de personas con discapacidad de la región, demuestra la importancia que tiene la implementación efectiva de este Programa de Acción en el mejoramiento de la calidad de vida de las personas con discapacidad, y en la promoción de su vida independiente.

Otro resultado positivo es el trabajo que se promueve actualmente para reformar los contenidos del PAD en línea con la agenda 2030 y los ODS, así como también con el modelo social de la discapacidad.



 <b>Pilar de la OEA</b>	 <b>Nombre de Actividad</b>	<b>Beneficiarios</b>	<b>Países Donantes</b>
Derechos Humanos	Grupo de Trabajo del Protocolo de San Salvador	Los 16 Estados Partes que ratificaron el Protocolo de San Salvador	Argentina y Nicaragua
 <b>Información Adicional</b>	<a href="http://www.oas.org/es/sadye/inclusion-social/protocolo-ssv/">http://www.oas.org/es/sadye/inclusion-social/protocolo-ssv/</a>	 <b>Fecha</b>	3/1/2010 a present

## RESUMEN DEL PROGRAMA

El Sistema Interamericano de Derechos Humanos tiene un instrumento jurídico único de carácter vinculante para la defensa de los derechos económicos, sociales y culturales: el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, “Protocolo de San Salvador”(PSS). El Protocolo consagra las obligaciones de los Estados Parte para observar los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, representando entonces un mandato para que aquellos respeten e implementen concretamente estos Derechos, así como también provean de garantías a su ejercicio a los ciudadanos de la región. En la actualidad, 19 países han firmado este instrumento y 16 lo han ratificado: Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Suriname y Uruguay.

Mediante la Resolución AG/RES. 2074 (XXXV-O/05), la Asamblea General de la OEA adoptó los Estándares para la Preparación de Reportes Periódicos, los cuales responden al cumplimiento del artículo 19 del Protocolo de San Salvador, instruyó al Consejo Permanente para llevar adelante propuestas acerca de la composición y funcionamiento del Grupo de Trabajo establecido para examinar los reportes nacionales (AG/RES. 2262 (XXXVII-O/07), solicitó a la CIDH proponer al Consejo Permanente los indicadores de progreso que serían usados para informar acerca de cada uno de los grupos de derechos protegidos (AG/RES. 2074 (XXXV-O/05), y, a través de la Orden Ejecutiva N° 08-01 Rev. 9. (Anexo D), la Secretaría General de la OEA delegó al Departamento de Inclusión Social (DIS) de la Secretaría de Acceso a Derechos y Equidad (SADyE) el ejercicio de la Secretaría Técnica del Grupo de Trabajo del Protocolo de San Salvador

## OBJETIVOS







Los principales objetivos son brindar a los Estados Parte herramientas para revisar el status de los derechos consagrados en el Protocolo, identificar temas y agendas pendientes basadas en un diálogo participativo con la sociedad civil, y definir estrategias que posibiliten el progresivo cumplimiento de los derechos consagrados en el Protocolo. También fomentar que además de la realización de reportes, los Estados Parte asuman el proceso de evaluación y medición de los derechos sociales.

## RESULTADOS

Con el apoyo de la Secretaría Técnica, el Grupo de Trabajo implementó procesos de asistencia técnica y seminarios de formación con el fin de fortalecer las capacidades de los Estados Partes para desarrollar una metodología de indicadores de medición de los derechos consagrados en el PSS. En 2016, más de 4º funcionarios públicos de 23 instituciones públicas de El Salvador fueron formados en la preparación de Reportes Nacionales. Desde 2014 hasta la fecha, se organizaron 4 sesiones regulares del Grupo de Trabajo, y 9 reportes nacionales correspondientes al primer y/o segundo grupo de derechos fueron evaluados.

Como una consideración general sobre el sistema de reportes, cabe destacar que el Grupo de Trabajo reúne sus observaciones y recomendaciones preliminares a los Estados Partes que están siendo analizados, luego se establece una fecha para la organización de una reunión pública con la presencia de un representante del Estado Parte y expertos del Grupo de Trabajo para revisar los documentos presentados, y finalmente el Grupo de Trabajo hace públicas sus conclusiones. El próximo reporte se presenta en un período de tres años posterior a que este proceso de revisión concluye. En esa ocasión, y con base en los reportes previos, los Estados presentarán un reporte con información sobre el primer y segundo grupo de derechos.



 <b>Pilar de la OEA</b>	 <b>Nombre de Actividad</b>	 <b>Beneficiarios</b>	 <b>Países Donantes</b>
<b>Derechos Humanos</b>	Lineamientos para el Empoderamiento y la	<i>Honduras</i>	Agencia Española de Cooperación Internacional
 <b>Información Adicional</b>	<i>Enlace a página web</i>		
	 <b>Fecha</b>	<b>4/1/2016</b>	<b>a 9/1/2017</b>

## RESUMEN DEL PROGRAMA

El proyecto pretende contribuir a fortalecer las iniciativas intersectoriales que se llevan adelante en los estados miembros beneficiarios del proyecto- Costa Rica, El Salvador, Honduras, Guatemala, Nicaragua, Panamá y República Dominicana- para velar por la inclusión digital de los Niños, Niñas y Adolescentes (NNA) al mismo tiempo que por la protección de los derechos de los (NNA) en el uso de internet y estimular el ejercicio de sus derechos. Para ello, propone en primer término la identificación de prácticas promisorias de políticas, programas e iniciativas que se llevan adelante en los países beneficiarios así como también en otros países de la región. Seguidamente, y sobre la base de los principales hallazgos de esta investigación, se diseñarán e implementarán en conjunto con las instituciones nacionales rectoras de la niñez de los países beneficiarios talleres de consulta intergeneracionales con organizaciones de niños, niñas y adolescentes y representantes institucionales de los países participantes, cuyos principales hallazgos y conclusiones serán sistematizados en un documento de orientación, que no sólo contendrá recomendaciones a nivel de instituciones sino que incorporará la visión de los NNA frente a la problemática. Este documento será compartido con los participantes del proyecto y los principales actores en el tema de los países beneficiarios considerando instituciones públicas, de la sociedad civil, agencias de cooperación, e instituciones académicas, entre otras que realizan un trabajo relevante en la temática.

## OBJETIVOS

Contribuir a los esfuerzos de los países participantes para la inclusión digital de niñas, niños y adolescentes, tomando en cuenta las medidas necesarias para su protección y empoderamiento para el ejercicio de sus derechos en el internet.

## RESULTADOS

El resultado principal del proyecto es la producción de un documento a nivel regional que además de contener un conjunto de recomendaciones contextualizadas dirigidas a instituciones y organizaciones de distintos sectores que trabajan en la protección de los derechos de los NNA que servirán como insumos para revisar y fortalecer sus iniciativas, plasma la visión de los niños, niñas y adolescentes de los países beneficiarios en torno a la inclusión digital y la protección y el ejercicio de sus derechos en el uso del internet.

Por otra parte, y como resultados secundarios, las actividades planteadas con las organizaciones de niños, niñas y adolescentes y de los representantes de diversas instituciones de la subregión apuntan a i) determinar el nivel de la brecha digital en los países participantes; ii)recoger su punto de vista sobre el tema y visualizar sus comportamientos ante la percepción de los riesgos en el ciberespacio , y finalmente, iii) promover el diálogo y el debate entre ellos de modo de sensibilizarlos ante el problema y estimular su participación e incidencia en dichas organizaciones para que tengan un rol más activo en el diseño de las estrategias que se desarrollan intersectorialmente para lograr un acceso y uso seguro , responsable y productivo del internet.